

En *Estado de situación de las democracias en América Latina y el Caribe*.
(Argentina): CLACSO.

Movimientos sociales, Estado y democracia en el siglo XXI.

Soledad Stoessel y Martín Retamozo.

Cita:

Soledad Stoessel y Martín Retamozo (2025). *Movimientos sociales, Estado y democracia en el siglo XXI*. En *Estado de situación de las democracias en América Latina y el Caribe*. (Argentina): CLACSO.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/martin.retamozo/328>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/psap/v6u>



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. *Acta Académica* fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS DEMOCRACIAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

**(NARCO) NEOLIBERALISMO AUTORITARIO
O DEMOCRACIA CON DEMOS**

René Ramírez Gallegos
(Coord.)



Estado de situación de las democracias en América Latina y el Caribe

**(Narco)neoliberalismo autoritario
o democracia con *demos***

René Ramírez Gallegos
(coord.)



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Karina Batthyány - Directora Ejecutiva

Pablo Vommaro - Secretario Académico

María Fernanda Pampín - Directora
de Publicaciones

Equipo Editorial

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

Solange Victory, Marcela Alemandi

y **Ulises Rubinschik** - Producción Editorial

Equipo de Investigación

Cecilia Gofman - Responsable de
Proyectos Especiales



AFD
AGENCE FRANÇAISE
DE DÉVELOPPEMENT

AFD

Lorena Chara - Directora en Argentina

Carlos Pincemin - Especialista Economía &
Cambio Climático

Philippe Serres - Director Regional Países
Andinos



LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES

CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE

Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital
desde cualquier lugar del mundo ingresando a libreria.clacso.org

Estado de situación de las democracias en América Latina y el Caribe. (Narco)neoliberalismo autoritario o democracia con demos (Buenos Aires: CLACSO, diciembre de 2024).

ISBN 978-987-813-944-9



CC BY-NC-ND 4.0

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875

<clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org>

Índice

Agradecimientos	9
Presentación	11
<i>René Ramírez Gallegos</i>	
Introducción. América Latina y el Caribe: socioecología/economía política de la democracia en el siglo XXI	13
<i>René Ramírez Gallegos</i>	
Capitalismo y democracia: crisis, transición energética y nuevo orden regional	
Las disputas (anti)democráticas por el control de los comunes y la transición energética en América Latina	85
<i>Antonio Malo Larrea y Lucía Gallardo Fierro</i>	
Los alimentos terrestres. Narcolonialismo, guerra contra las drogas y democracias violentas en América Latina	127
<i>Juan Guijarro</i>	
Deuda, Estado de derecho y democracia en América Latina	243
<i>Andrés Chiriboga Tejada</i>	
Democracia fake. Capitalismo digital, comunicación y esfera pública	275
<i>Julián Atilano Morales</i>	

Democracia cercada

La democracia en disputa. Entre el asedio y la emancipación 307
Luciana Cadahia

Doblar hasta quebrar. Una mirada sobre los extremismos
de derecha en América Latina 331
Marcela Schenck

El retorno de la política. La ideología como anticiclo..... 367
René Ramírez Gallegos

Resistencias creativas

Movimientos sociales, Estado y democracia en el siglo XXI 411
Soledad Stoessel y Martín Retamozo

Democracia feminista en América Latina. Los feminismos
latinoamericanos en el laberinto actual de los partidos de extrema
derecha y progresistas 453
*Gabriela Gallardo Lastra, Florencia Nathalia Piñeyría,
Alejandra Yáñez-Cancino, Andrea Guillem Macías, Julia
Almeida Vasconcelos da Silva, Margarita Ramos Mier, Deisy Marisol
Quintanilla Ibarra, Diana Carolina Alfonso y Marysabel Pacheco-Arreaño*

La disputa por la verdad: universidad, ciencia y democracia 509
René Ramírez Gallegos, Sebastián Irigoyen y Jorge Zaruma Flores

Epílogo. Vida, paz y democracia con demos como vacuna al (narco)
neoliberalismo autoritario..... 555
René Ramírez Gallegos

Sobre los autores y autoras..... 595

Movimientos sociales, Estado y democracia en el siglo XXI

Soledad Stoessel y Martín Retamozo

Introducción

Crisis parece ser el nombre de una fase del ciclo de la normalidad en América Latina. Parafraseando a León Trotsky, podríamos decir que la condición histórica de la región es una “crisis permanente”. Sin embargo, la fase crítica actual posee una particularidad: se inscribe en los agitados oleajes de dislocación global, lo que incide en su anatomía, dinámica y alcances. Nos encontramos ante una crisis estructural y una crisis coyuntural. Por un lado, la situación global tensiona el modo dominante de producción de la vida (no solo económica) y afecta la constitución de lo social y la propia condición humana a nivel planetario. En este sentido, pueden interpretarse las aceleradas transformaciones en las formas de producción de bienes y servicios (materiales e inmateriales), la configuración de heterogéneas formas de relaciones humanas contemporáneas, los cambios en los modos de distribución y los patrones de redistribución condicionados por el capitalismo global, así como las nuevas formas de la subjetividad contemporánea.

Por otro lado, estas profundas transformaciones inciden también –no sin mediaciones– en la crisis de los modos de producción de la comunidad política. Esto se traduce en desafíos en el nivel de lo que José Nun llamó “régimen social de acumulación concreto” (Nun, 1987) dentro del modo de producción, así como desafíos para el régimen político de gobierno.

Ahora bien, en la actualidad no es solo el funcionamiento de las sociedades lo que está en crisis, sino que la crisis alcanza tanto –si se nos permite el juego de palabras– a su propia forma democrática de configuración como a su forma de configuración democrática. Es decir, la situación afecta tanto las lógicas y dispositivos que hacen de la democracia la puesta en acto de la soberanía popular (la democracia como forma) como los horizontes normativos de una sociedad democrática entendida como una comunidad política regida por principios de igualdad, justicia y reconocimiento mutuo (democracia como contenido) (Pateman, 2014). Las crisis generan estos interregnos que, como decía Gramsci, son terreno fértil para los fenómenos más morbosos, pero también –agregamos con el optimismo de la voluntad– para que en sus intersticios emerjan atisbos del devenir de otros mundos posibles (y deseables).

En América Latina, el advenimiento de estos tiempos inciertos no puede leerse de forma lineal, del mismo modo que no podía vislumbrarse el devenir de la modernidad desde un “mirador” determinista, progresivo y rectilíneo. Ante esto, Bolívar Echeverría (1996) innovó con la figura del *ethos* barroco, al sostener que cada vez era “menos imprecisa la captación que tenemos de las dimensiones reales de la crisis de nuestro tiempo” (p. 68). La persistencia de formaciones sociales abigarradas, en las que conviven lo plural, lo tradicional, lo moderno y lo posmoderno, se mantiene en un inestable equilibrio producido hegemónicamente (Zavaleta Mercado, 2000), en un contexto de heterogeneidad estructural y periferia capitalista (Quijano, 2000), lo cual constituye la complejidad de la dinámica social y política. El desafío, entonces, es proponer

un análisis de esas morfologías sociopolíticas que se traducen en coyunturas vivas para nuestros países.

Las épocas de crisis y las crisis de épocas fueron contextos creativos para el pensamiento político en América Latina. Los estudios clásicos sobre el Estado burocrático-autoritario de O'Donnell y Schmitter (O'Donnell, Schmitter y Whitehead, 1988) abordaron las crisis en el orden social provocadas por las tensiones producto de la expansión de demandas y formas de lo nacional-popular en contextos capitalistas. En este sentido, se postula la supresión de las mediaciones para preservar el corazón de las relaciones sociales de producción capitalistas ante el avance de la movilización popular. La salida de los procesos autoritarios como proceso crítico fue analizada por autores como Juan Carlos Portantiero y José Nun (1987), quienes generaron un arsenal de conceptos sensibilizadores para el estudio de las transiciones a la democracia. Hace casi veinticinco años, reflexionando sobre una de las crisis de la región, Manuel Antonio Garretón (2001) presentó en la CEPAL un trabajo en el que proponía una serie de hipótesis para pensar la constitución de actores sociales y las nuevas formas de acción colectiva en América Latina. La primera hipótesis sostenía la presencia, alrededor del año 2000, de un cambio en el devenir de la sociedad, caracterizado por una especie de subducción entre el tipo de sociedad dominante en el siglo XX ("la sociedad industrial de Estado nacional") y la consolidación de la sociedad posindustrial globalizada. Este cambio tuvo implicancias en la puesta en cuestión de la configuración que regulaba las relaciones entre Estado y sociedad civil bajo una forma nacional-popular o político-céntrica. La segunda hipótesis de Garretón era epistemológica y se enfocaba en mostrar el agotamiento de una mirada centrada en la posición estructural como aspecto determinante de la acción colectiva y escenario privilegiado para el estudio de la conformación de actores sociales. Por el contrario, los cambios societales constituían escenarios ("ejes") para la acción colectiva, a saber: "la democratización política, la democratización social o lucha contra la exclusión y por

la ciudadanía; la reconstrucción y reinserción de las economías nacionales o la reformulación del modelo de desarrollo” (2001, p. 5). La tercera hipótesis identificaba el paulatino reemplazo de una matriz constituyente nacional-popular y el desplazamiento de los actores clásicos, como el sindicalismo, que operaban como mediaciones y que disputaban proyectos histórico-políticos en favor de actores arraigados en el mundo de la vida, cuyos horizontes de acción se inscribían en lo sociocultural.

Luego de un cuarto de siglo, el fondo del debate actual sobre nuestra condición es el mismo: cómo han cambiado nuestras sociedades (una pregunta por lo histórico-social), cómo podemos estudiarlas (un asunto epistémico-metodológico) y cómo podemos intervenir en ellas para constituir las de un modo posible y deseable con criterios de justicia social y de vida digna (una cuestión política). Ahora bien, para comenzar es necesario reconocer los cambios que son condición de posibilidad de las transformaciones en la matriz sociopolítica, que instaura nuevas condiciones para la acción histórica y afecta tanto los repertorios de acción colectiva como las formas de representación política.

El concepto de “matriz sociopolítica” constituye un prisma para objetivar las relaciones entre Estado, régimen político (poderes, partidos, movimientos sociales) y sociedad civil. El aspecto de la matriz que nos interesa aquí es el que constituye un modo de producir representación. No solo nos referimos al momento de agregar y tramitar demandas o de disputar el poder político mediante actores constituidos, sino que la matriz actúa recursivamente sobre el horizonte de representación colectivo en el que el ejercicio de la soberanía puede desarrollarse. En otras palabras, la crisis no es solo por el modo de gestionar lo social, sino de producir lo común; la misma comunidad política es la que está en tensión y cuestionada, y encuentra dificultades para configurarse como un horizonte compartido. Esto implica una doble inscripción de la crisis para los actores políticos y nos permite decir que es una crisis de los sujetos. Por un lado, la diversidad, la heterogeneidad, la

fluidez y la complejidad de la sociedad generan desafíos para las formas de representación. Esto, que hace décadas había marcado la crisis del Estado por la sobrecarga sistémica y la crisis de los partidos políticos por su impotencia representativa, ahora también afecta a buena parte de los movimientos sociales. Pero, por otro lado, la misma forma social se encuentra puesta en cuestión tanto en el nivel de las subjetividades como de la comunidad.

En la región más desigual del planeta, los conflictos sociales emergentes no son otra cosa que síntomas de modos de producir y organizar la vida en comunidad, y ciertamente por la construcción democrática del orden social. Siguiendo a Dagnino, Olvera y Panfichi (2006), la disputa por la construcción democrática en América Latina, entendiendo este proceso como una lucha por la hegemonía que libran actores sociales y políticos, articulados de maneras específicas, que defienden diferentes proyectos políticos, esto es, combinaciones de intereses, ideas, valores, principios y programas de acción, no se da exclusivamente por los cauces institucionales clásicos –parlamento, partidos políticos–, sino por medio del conflicto social y la disputa en y por los espacios públicos que transcurren entre el “mundo *offline* y el *online*” y que pueden constituir el lugar integrador de la comunidad.

En este horizonte, este capítulo propone una entrada a la dinámica política y a la disputa por el orden social a partir del estudio de la relación entre movimientos sociales, Estado y democracia, instancias que también han sido atravesadas por la crisis. En efecto, hemos llenado páginas hablando de la crisis de la democracia, la crisis del Estado y, podemos agregar ahora, la crisis de los movimientos sociales como figuras de mediación en la disputa por el orden social. Nuestra hipótesis exploratoria es que la crisis se origina en los cambios morfológicos de lo social en la era contemporánea, cuyos anudamientos y abigarramientos son particulares en la región y generan desafíos para los cuales estas figuras –Estado, movimientos y democracia– encuentran sus limitaciones y se vuelven poco eficaces. Esto no quiere decir, claro, que desaparezcan ni que

las formaciones sociales que les dieron origen hayan desaparecido, sino que las formas actuales de esos procesos ya no se dejan representar completamente por estas figuras y las ponen en crisis.

El presente trabajo, en lo que sigue, se organiza de la siguiente forma. En la primera parte, se realiza un breve recuento de las formas de acción colectiva, demandas y sujetos que emergen durante la crisis de la matriz mercadocéntrica a fines de los años noventa y que serán el prelude del inicio de un nuevo ciclo político. En la segunda parte, se reconstruye la relación entre movimientos sociales, conflicto y Estado a partir de la nueva matriz sociopolítica caracterizada por la centralidad del Estado, procesos de incorporación de sujetos históricamente olvidados a la comunidad política, cambio en el modelo de desarrollo y, por lo tanto, nuevas demandas sociales. En la tercera parte, se presta atención al cambio de ciclo político con la llegada al poder de gobiernos de derecha conservadora que, al mismo tiempo que encuentran su fuerza en movimientos y colectivos antiderechos, conservadores y antiigualitarios arraigados en el sustrato social, se contrabalancea con otros gobiernos que vuelven a recuperar lo nacional-popular como principio político, cuya reactualización, en parte, se explica por ese otro acumulado social de resistencia, crítica y lucha social en clave emancipatoria en una región en constante disputa democrática.

Crisis del modelo neoliberal, laboratorio social y preanuncio del giro progresista en América Latina

Las configuraciones autoritarias que cerraron los ciclos de movilización política popular del ciclo 1940-1970, surgidos al calor de procesos de modernización societal y regímenes sociales de acumulación con distintos grados de sustitución de importaciones, establecieron ciertas condiciones para la disputa política. En efecto, la transición en la década del ochenta, tras la crisis de los regímenes autoritarios, generó espacios políticos y discursivos donde se

articularon demandas centradas en el régimen político (el retorno a la democracia formal), la vigencia del Estado de derecho y el reconocimiento de libertades civiles. Esto no significa que la lucha por las condiciones de vida, en su dimensión de reproducción y bienestar, estuviera ausente en los años ochenta, sino que la forma política democrática contenía una promesa de bienestar social que subordinaba ciertas luchas.

La transición democrática no desconoce el protagonismo de la sociedad movilizada, pero se consagra en la mayoría de países latinoamericanos por un acuerdo entre las élites (militares y políticas). Si bien movimientos de derechos humanos, como el de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y la Mesa de Diálogo en Chile, fueron vitales para la restitución del régimen democrático, las transiciones fueron resultado de un pacto intraélites (O'Donnell, Schmitter y Whitehead, 1988) que subestimaba el rol que habían jugado los movimientos sociales. Se ha hablado de una doble transición, a la democracia y a la definitiva instalación de un nuevo modelo económico y político (la globalización neoliberal/gobernanza financiera) –ya iniciado en los años setenta–, lo cual generaría las condiciones para la revitalización de un ciclo de movilización social, ahora ya en un contexto democrático –entendido en su mínima acepción–, que vería el surgimiento de nuevas demandas y nuevos actores sociales que comenzarán a cohabitar con los “clásicos” movimientos, como el sindical y el campesino. Luna de miel entre democracia liberal-representativa y neoliberalismo. No por nada comenzó a hablarse del “laboratorio social” en que se habría convertido América Latina.

No obstante, las promesas incumplidas de la democracia en cuanto a lo social y las dificultades de los gobiernos para lidiar con aspectos heredados estructurales, como la crisis de la deuda y los procesos hiperinflacionarios, hicieron hablar de “la década perdida” para referirse a los años ochenta. En este contexto, que coincide con la debacle del bloque soviético y la progresiva instalación

del lema thatcheriano “No hay alternativa”, en varios países se ensayaron reformas neoliberales implementadas por gobiernos que llegaban al poder a partir del voto popular en elecciones avaladas por el sistema político. Es cierto que la relación entre estos gobiernos que algunos llamaron “neopopulistas” y la institucionalidad democrática fue tensa, cuando no abiertamente hostil. Los procesos de reformas se basaron en una apologética defensa del libre mercado como mecanismo eficiente de coordinación social y confiaron en los agentes económicos privados la tarea de concretar el modelo. Esto implicó una narrativa tendiente a deslegitimar el rol del Estado como coordinador, regulador, actor y horizonte de reconocimiento a partir de considerarlo un impedimento estructural (por su burocracia y corrupción) para el crecimiento económico (Evans, 1996).

Sin embargo, vistas en su conjunto, las transformaciones económicas orientadas por el Consenso de Washington, que se arraigaron de manera particular en cada realidad nacional, arrojaron indicadores sociales regresivos en términos de pobreza y desigualdad. Mientras los sectores populares y amplias capas medias perdieron poder adquisitivo, los sectores dominantes afianzaron su influencia estructural. Estas reformas estructurales no solo buscaban instaurar un nuevo orden económico neoliberal, sino también transformar la matriz sociopolítica nacional-popular y estadocéntrica. La gestión de la cuestión social por parte del mercado y sus agentes económicos encontró sus límites tanto por el agotamiento sistémico como por la emergencia de demandas vinculadas a la crítica situación socioeconómica y los cambios en las condiciones de reproducción de la vida, a las que se sumaron luchas por diferentes tipos de reconocimiento (Fraser, 2000).

En efecto, las demandas por redistribución y reconocimiento se amalgaman para procesar desigualdades materiales y simbólicas. Las primeras oleadas de resistencia al nuevo orden neoliberal mostraron formas heterogéneas de luchas que articularon temporalidades largas, repertorios de acción clásicos y el aprovechamiento

de contextos novedosos. Es cierto que las viejas estructuras políticas populares (como los partidos y sindicatos) mostraron, en algunos casos, limitaciones para procesar las demandas y representar a estos nuevos sujetos beligerantes. Movimientos como los Sin Tierra en Brasil, el zapatismo en México, la FEJUVE en Bolivia, los “trabajadores desocupados” en Argentina, los movimientos campesinos e indígenas de la región andina, los movimientos ambientalistas y los colectivos asamblearios, como las asambleas ciudadanas, resignificaron las experiencias previas. Los dilemas entre configurarse como movimientos sociales que demandan al Estado políticas de redistribución y reconocimiento, devenir Estado con un proyecto hegemónico o, por el contrario, sustraerse de la soberanía estatal para generar zonas de autonomía comunitaria atravesaron todas estas experiencias. En este contexto surge la demanda de movimientos sociales por autonomía, demanda que, en algunos casos, contiene un horizonte emancipatorio y una posibilidad utópica, ligada a la autodeterminación de los pueblos y la creación de ámbitos contrahegemónicos por fuera de la institucionalidad neoliberal.

Una segunda dimensión, que atañe al modo de relacionarse con el Estado, es la cuestión territorial, entendida como un ámbito fundamental de disputa en el marco de un ciclo en el que el capital transnacional apunta a un nuevo modelo de acumulación por desposesión en torno a los recursos naturales, y en el que el Estado se retira progresivamente de diversos espacios (Davis y Davey, 2022). La movilización social de los años noventa está fuertemente relacionada con el territorio, en cuyo seno se posicionan demandas que articulan materialidad y reconocimiento simbólico: lucha por los recursos naturales, la vida y la identidad.

La tercera dimensión de la movilización y el conflicto social en el marco del régimen neoliberal de los años noventa se refiere a los repertorios de acción. La acción colectiva tendió cada vez más hacia un tipo acción directa, en un contexto donde se prescindía de las mediaciones clásicas, debido al agotamiento de su capacidad

de representación. El desprestigio de estas mediaciones posibilita el surgimiento de nuevos repertorios, varios de los cuales poseen una orientación destituyente. El grito de principios del siglo XXI, “¡Que se vayan todos!”, es sintomático de esta realidad. Las movilizaciones destituyentes en Argentina (2001), Ecuador (2000, 2005) y Bolivia (2003, 2005) revelaron trazos de las clásicas demandas laborales, combinadas con reivindicaciones heterodoxas: por soberanía nacional, fin del dominio de la clase política tradicional –la “partidocracia”–, transparencia institucional, democracia asamblearia, plurinacionalidad. Estas demandas se expresaron a través de acciones directas, algunas novedosas y otras adaptando repertorios clásicos; así se sucedieron la toma de edificios públicos e instituciones financieras, el bloqueo de espacios públicos, la ocupación de tierras. En muchos de estos espacios y como forma de organizar las acciones, se implementaron lógicas asamblearias que buscaban discutir nuevos principios democráticos en una clave de horizontalidad y de disputa de las jerarquías impuestas en distintos espacios (dirigentes partidarios, cúpula sindical, instituciones públicas, etc.). Los movimientos de la sociedad encontraron en los movimientos sociales una figura de mediación y representación para emerger en el espacio público y político; sin embargo, en algunos casos, su radicalidad limitada o excesiva y los dilemas organizativos afectaron su duración como agentes de cambio.

Pese a la debilidad de las mediaciones clásicas de la matriz estadocéntrica en el nuevo contexto, el movimiento sindical, que hasta los años ochenta ostentaba la mayor capacidad de movilización y activación de conflicto social, en algunos casos logró (re)inscribirse en esta nueva etapa. Por ejemplo, en México, a mediados de los noventa, surgió un sindicalismo abierto que no solo impugnaba el neoliberalismo, sino también las lógicas que sustentaban el sindicalismo mexicano dominante (el charrismo). Bajo un enfoque movimientista, se han creado organizaciones con estructuras asamblearias, métodos de democracia interna y disposición para articularse con otros actores. Entre ellas destacan la Coordinadora

Intersindical Primero de Mayo, el Frente Auténtico del Trabajo y la Unión Nacional de Trabajadores, que aglutinó a sindicatos autonomistas surgidos en los setenta. En Argentina, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), conformada en 1992, nucleó a varios gremios, especialmente estatales, que se distanciaron de la CGT por su apoyo a las reformas promercado. La CTA pasó a representar distintos segmentos sociales –informales, jubilados, trabajadoras domésticas– y se vinculó con organizaciones de trabajadores desocupados (“piqueteros”) que emergieron a mediados de los noventa (Retamozo y Morris, 2015). Estos últimos protagonizaron la ola de protestas de 2000-2003, innovando en los repertorios de acción a través del piquete y las asambleas. Un horizonte movimientista también atraviesa esta constelación (Rossi, 2023), donde los sindicatos debieron inscribirse en más amplias redes de movilización (Ramírez Gallegos y Stoessel, 2023). En Ecuador, a fines de los noventa, emerge la Coordinadora de Movimientos Sociales bajo la hegemonía del movimiento indígena y con el apoyo de sindicatos petroleros, públicos y otras organizaciones antineoliberales. La “guerra del agua” en Bolivia (2000) se materializa desde la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, en la que convergen campesinos cocaleros, ambientalistas, grupos de vecinos y obreros. Esta Coordinadora empleó el bloqueo de vías para oponerse a la privatización del recurso natural, enmarcándolo como patrimonio público. Así, logró doblegar el programa privatizador y superar la precariedad de la COB como espacio de articulación popular. En Argentina, en 2001, las organizaciones sindicales también se sumaron a las movilizaciones lideradas por trabajadores desocupados y segmentos de clases medias empobrecidas (Ramírez Gallegos y Stoessel, 2023).

Ahora bien, las gramáticas de la acción para estos movimientos sociales permanecían más o menos estables en relación con lo que había caracterizado la transición a la democracia. Su emergencia se produjo en el intersticio entre la implementación del orden neoliberal en lo económico y la persistente matriz sociopolítica

estadocéntrica sedimentada. En este contexto, se puede considerar un incremento de la conflictividad, pero dentro de parámetros de acción regularizados. Es cierto que emergieron nuevas demandas, pero la lógica continuó siendo la de tramitarlas mediante la exposición contenciosa en el espacio público a través de acciones no institucionalizadas, un repertorio típico de los movimientos sociales.

Quizás la mayor novedad del período fue la irrupción del zapatismo en México, que articuló modos de acción clásicos de los años sesenta (la guerrilla bajo la forma de un Ejército de Liberación Nacional), la tramitación de la cuestión indígena y la impugnación del proceso de libre comercio y globalización neoliberal. Sin embargo, la apelación a la sociedad civil y al Estado (con su “mal gobierno”) actualizó las claves de acción de la época. Así, las gramáticas de acción movimientistas continuaron teniendo efectos estratégicos e identitarios y, como en el caso del zapatismo, las nuevas tecnologías fueron utilizadas de manera inteligente como tácticas comunicacionales. La articulación a escala internacional en este período vino de la mano de instancias de resistencias específicas a las políticas globalizadoras neoliberales (Seattle en 1996) y propuestas de encuentros multisectoriales como fueron los Foros Sociales Mundiales, en los que se exponían críticas a la hegemonía neoliberal, pero que no lograron niveles de coordinación para la acción política conjunta a nivel regional.

En este sentido, el mundo del trabajo, el barrio, el campo, el sindicato, la calle y la plaza seguían siendo los espacios públicos de producción de lazos sociopolíticos. Esto, por supuesto, no implica una transparencia impoluta de estos espacios, en los que una sociedad civil estéril se congrega y se reconoce. Al ser también lugares de producción de la subjetividad política, se transformaron en focos de intervención por parte de actores institucionalizados (fuerzas represivas del Estado) o de diferentes formas de intervención paraestatal, que buscaban (y aún lo hacen) cercenar estos espacios.

Como conclusión, el siglo XXI inicia con la proliferación de múltiples formas de resistencia social y sujetos que descentran a los actores clásicos de la escena pública. No hay un único actor social que organice y dé sentido al conjunto de movimientos sociales particulares. Tampoco hay un eje que estructure el campo de la movilización social, como ocurrió durante años cuando primaba un capitalismo desarrollista regulado, que se nutría del principal conflicto entre el capital y el trabajo.

Giro a la izquierda, incorporación social y nuevas demandas sociales

La progresiva pérdida de legitimidad de las políticas del Consenso de Washington, el deterioro de las condiciones de vida en América Latina y la irrupción de nuevos sujetos sociales movilizados fueron el preludio de un nuevo ciclo político que se iniciaría a principios del siglo XXI, aunque con diferentes alcances y particularidades según cada país. Este ciclo, conocido como “giro a la izquierda” (Stoessel, 2014), se caracterizó por el surgimiento de proyectos políticos que cuestionaron el neoliberalismo y los sectores dominantes alineados con aquel (FMI, bancos, élites empresariales, conglomerados mediáticos). Estos proyectos se apoyaron en una matriz sociopolítica cuya singularidad fue el recentramiento del Estado como coordinador de la sociedad en un modelo que buscó tramitar las demandas emergentes y generar políticas distributivas.

Los gobiernos posneoliberales enfrentaron el desafío de traducir esas demandas, a menudo disruptivas y de tono destituyente, para incorporarlas e institucionalizarlas dentro del sistema político. Asimismo, tuvieron que conciliar la vocación contrahegémica de muchos movimientos sociales con las agendas y reformas institucionales que requerían devolverle credibilidad a la política y al Estado. Estos desafíos se sumaron a la herencia dejada por la matriz neoliberal: paupérrimas condiciones de vida para la mayoría

de la población, servicios públicos deteriorados o inexistentes, Estados desmantelados, reducidos e ineficientes y, en algunos países, Estados que habían delegado funciones sociales al mercado o a la familia y asumido funciones securitarias y militares, debilitando los Estados de derecho.

Así, recuperar al Estado como agente de intervención, coordinación social y reparador del daño perpetrado por la matriz neoliberal mercadocéntrica se vuelve prioritario para estos gobiernos. Luego de casi tres décadas de desprestigio del Estado inducido por el *mainstream* neoliberal, la recuperación de las capacidades estatales aparece como un objetivo primordial en los proyectos políticos de los gobiernos progresistas. En efecto, en las nuevas Constituciones de los países andinos (Ecuador, Venezuela y Bolivia), el Estado figura como principio fundante y gestor del orden social, y esto se expresa en la constitucionalización de la nacionalización de sectores estratégicos, la conformación de empresas públicas, la responsabilidad del Estado en la garantía de todo tipo de derechos y la promoción de un modelo de desarrollo inclusivo y soberano. Esta centralidad del Estado en algún punto tensionará con la esfera de los movimientos sociales puesto que entre ellos se disputarán, en muchos casos, el ejercicio de la representación política de distintos actores sociales. Así, buena parte de la conflictividad social del giro a la izquierda se explica por los desafíos mencionados frente a los cuales el Estado no siempre pudo estar a la altura. Sin embargo, el Estado no es solo un agente que reviste ciertos rasgos distintivos (monopolio de la violencia legítima, capacidad jurídica y burocrática para implementar decisiones vinculantes) que aparentemente lo vuelven un ente separado de la sociedad, sino que también opera como un terreno conflictivo que desdibuja la frontera Estado-sociedad, hacia el cual todas las fuerzas sociales se dirigen, ya sea para incidir sobre él, negociar con él, participar en él, disputarlo o transformarlo.

En este contexto, estos gobiernos tuvieron que recuperar capacidades estatales para ponerlas al servicio de agendas públicas

inclusivas, desafiar las formas de organización de las sociedades centradas en el libre mercado y la globalización financiera neoliberal, lidiar con deudas exorbitantes con organismos internacionales de crédito, recomponer la economía para generar crecimiento y, con ello, implementar políticas redistributivas. Asimismo, buscaron recuperar la soberanía con una proyección de regionalismo autónomo respecto a Estados Unidos, con estructuras institucionales propias, como la UNASUR.

La puesta en cuestión del modelo neoliberal se tramitó en algunos países como Ecuador, Bolivia y Venezuela mediante proceso constituyentes que, invocando la soberanía popular, propusieron una nueva institucionalidad política, procuraron reconocer derechos y performar un modelo de desarrollo que se apartaba del hegemónico imperante. Esto implicó abordar la cuestión de la gestión de los recursos naturales en economías dependientes de su explotación y con agentes nacionales y transnacionales de poder involucrados en disputas geoestratégicas. Las nacionalizaciones, el control estatal y las regulaciones de la explotación de recursos naturales generaron tensiones con estos capitales, pero también con movimientos sociales ambientalistas que denunciaban la implementación de un modelo “neoextractivista” incluso en los países gobernados por partidos de izquierda. Estos aprovecharon el *boom* de los *commodities* para llevar adelante políticas redistributivas, pero suscitaron conflictos ambientalistas, y las demandas contra el desarrollismo extractivista fueron unas de las que más ruido causaron durante el giro progresista. Colectivos ecologistas, movimientos ambientalistas y movimientos campesinos locales protagonizaron amplios conflictos situados territorialmente, desafiando las políticas desarrollistas de estos países. Las demandas de los movimientos ambientalistas sintonizaban con la crisis múltiple global (cambio climático, agotamiento de los recursos naturales, crisis medioambientales) y además dejaban ver que el extractivismo constituía un gran negocio para el capital transnacional.

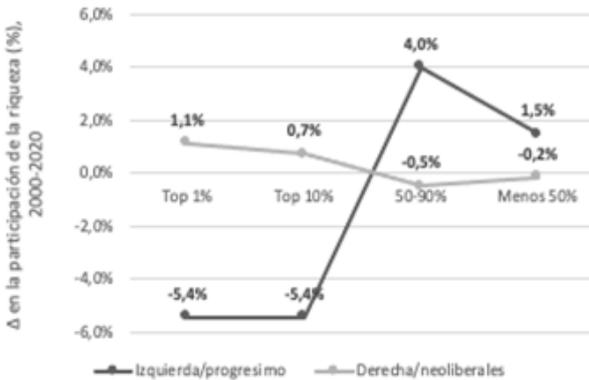
Otro ámbito de conflictividad social expresaba la precariedad de lo público y de los servicios públicos dinamitados (vacíados, privatizados o deteriorados) durante la década previa. Este contexto dio lugar a movilizaciones estudiantiles por el derecho a la educación gratuita y de calidad (como en el caso de Chile y Colombia, países que no se inscribieron en este giro progresista, salvo Chile durante un breve interregno), conflictos protagonizados por maestros y docentes en reclamo de mejoras salariales e infraestructura educativa, colectivos movilizados en demanda de mejoras en la seguridad social.

La precarización de la vida y del trabajo heredada de los años noventa fue revertida con diferencias según los distintos países. Hay un amplio consenso en la academia que, con base en robusta evidencia, establece que durante este ciclo la región latinoamericana redujo desigualdades y mejoró las condiciones de vida de las amplias mayorías. Amarante y Colacce (2018) presentan algunos datos, como la reducción en dieciséis de diecisiete países latinoamericanos del coeficiente de Gini en el período 2002-2012, siendo el año 2008 cuando se produce una disminución más significativa de la desigualdad (con excepción de Costa Rica) y el año 2015 cuando empieza a desacelerarse el proceso de reducción de desigualdades (Castillo Fernández, 2022). Asimismo, muestran que para tal período la participación del quintil más pobre en los ingresos totales aumentó, mientras que la del quintil más rico disminuyó. Adicionalmente, Gasparini (2019) expone cómo el crecimiento del ingreso en los hogares latinoamericanos entre 2006 y 2016 fue más pronunciado entre los hogares y personas del estrato bajo de la distribución, haciendo que las condiciones de vida de los habitantes de América Latina fuesen más igualitarias al final de la primera década del siglo que al comienzo de esta.

La implementación de medidas que se alejan de la ortodoxia neoliberal ha sido clave en la reducción de las desigualdades (Quintana, Salas y Correa-Quezada, 2019; Ramírez Gallegos, R., 2023). Tal como muestra en el gráfico 1, la mayor parte de los gobiernos

de izquierda o centroizquierda se inscribieron en una tendencia que benefició a los sectores medios y populares (los ubicados entre el 50 % y 90 % de la distribución), mientras que los gobiernos de derecha neoliberal evidencian una tendencia contraria. Ecuador, Uruguay, Cuba, Argentina y El Salvador fueron quienes realizaron cambios significativos en la estructura de la composición del ingreso, mientras que México, Brasil, Chile y Perú incrementaron los privilegios del 1 % y/o 10 % más alto de la distribución de ingresos.

Gráfico 1. Participación de la riqueza según ideología de gobierno, 2000-2020



Fuente: Ramírez Gallegos (2023).

Más allá de estos esfuerzos para reducir pobreza y desigualdades, la conflictividad social no cesó. Se abrieron nuevos frentes de conflicto o se reactualizaron otros, como el campo de conflictividad ambiental contra el extractivismo. Además, la disminución de la brecha de ingresos no implicó necesariamente una distribución de ingresos entre clases, grupos étnicos o géneros más equitativa (Kessler, 2019), ni una afectación radical a la concentración de la riqueza. Kessler (2019) sostiene que los tres mecanismos que mayormente explican la reducción de las desigualdades en la región son las transferencias monetarias, las pensiones no contributivas y el ingreso laboral, el cual se acompañó de otras reformas del mercado

de trabajo. Este último representó 50 % en la explicación de la reducción de las desigualdades. Ahora bien, cuando se comparan los ingresos de los trabajadores formales con los de los informales, no hubo tal reducción de la desigualdad, especialmente porque los aumentos de los salarios mínimos –los que gozan los trabajadores formales– son más eficaces en reducir desigualdades que las transferencias públicas no contributivas, como las políticas sociales focalizadas. Esto, en mercados laborales como los latinoamericanos, que revisten de un alto grado de informalidad (los países andinos son los más afectados al respecto), es importante para comprender los múltiples malestares que se fueron acumulando incluso durante el giro progresista. La relación entre condiciones de vida, reproducción social y trabajo es clave. A una mayor informalidad laboral, menos garantías de soportes materiales (ingreso estable, asalarización, sistema de cuidados) e institucionales (salud, educación, seguridad social) para el sostenimiento y protección material y simbólica de la vida. Como José Nun ya lo explicaba en los años setenta, en la región la pobreza no se explica por la falta de trabajo, sino por las condiciones laborales que imponían distintas actividades ligadas a un modelo de desarrollo dependiente. Las exclusiones del modelo de integración vía el empleo/mercado laboral, que comenzaron en los años ochenta, no se acabaron durante el ciclo de izquierda. Esto se tradujo en que, si bien vastos sectores pudieron gozar del “boom del consumo” impulsado gracias al crecimiento económico y a políticas distributivas, muchos de esos grupos fueron perdiendo esas inclusiones que generaba la incorporación en el mercado laboral. Si a esto se le suman dimensiones como los desplazamientos forzados de poblaciones y migraciones en distintas escalas, se entiende el surgimiento de organizaciones sociales ligadas a la economía popular y a los mercados informales como sintomático de aquello. Experiencias como la de la CTEP (2011) en Argentina, que aglutina a sectores particulares de la economía popular, han conjugado movilizaciones en el espacio público con negociaciones institucionales para reclamar al Estado algún mínimo

de protección social, como el “salario social”. Los países andinos han apostado por “lo popular y solidario”, pero se terminó más por regular desde el Estado las prácticas comunitarias y reforzar la precariedad de ciertos territorios y sujetos que por profundizar el tejido social y generar procesos de incorporación sociopolítica.

Esto expresó una de las debilidades de los gobiernos progresistas, sus modelos de desarrollo y formas de representación política. Por un lado, los liderazgos presidenciales suplantaron por medio del Estado las falencias de las mediaciones clásicas como los partidos políticos. No obstante, en una sociedad cada vez más diversa, la capacidad del Estado nacional-popular para integrar todas las demandas subalternas mostró claros límites. Por otro lado, la hegemonía que obtuvieron durante el lapso 2003-2014, apoyada en el recentramiento del Estado, cortocircuitó los vínculos entre bases sociales, organizaciones y sistema político, vínculos que hubieran permitido reconstruir el lazo social ampliamente lastimado durante la década neoliberal. Las transformaciones impulsadas “desde arriba” no siempre fomentaron una participación popular efectiva, lo que generó una escasa identificación con los proyectos políticos en curso. En los países andinos, dicho recentramiento estatal se apoyó en un proceso de modernización occidental que obliteró la dimensión plurinacional e intercultural, la cual había sido una demanda de los movimientos indígenas y campesinos durante al menos tres décadas. Esto hizo que el Estado, sin poder llegar a todos por igual ni hacerlo de forma tan eficiente –en algunos casos mostrando burocratización e incluso corrupción–, dejara huérfanos ciertos espacios que paulatinamente fueron ocupados por otros actores, desde organizaciones religiosas evangelistas y fuerzas del orden hasta nuevos espacios políticos de derecha.

Así, se superpuso una matriz nacional-popular por arriba, con subjetividades neoliberales arraigadas en el sustrato social que se relanzaban con fuerza (emprendedurismo, libertades individuales, rechazo al Estado y defensa de una meritocracia selectiva). Es decir, la disputa por la producción de la vida no solo no estaba

saldada, sino que cada vez más se inclinaba a favor de sujetos que apostaban al individuo, y no a la comunidad, a las libertades individuales, y no a la igualdad social. Esto nos permite señalar que la matriz sociopolítica actúa estructuralmente, pero dicha rigidez es al mismo tiempo debilitada o moldeada por los sujetos. Este escenario generó las condiciones para cuestionar cada vez más a la democracia, que, como veremos en la siguiente sección, fue un eje de los discursos reaccionarios.

El frente de conflictividad por abajo se combinó con otro frente que cada vez más estructuró la dinámica política y disputó las formas sociales. Los sectores dominantes y élites económicas comenzaron a emplear estrategias electorales y no electorales para disputar el Estado o alcanzar niveles de competitividad electoral. El desarrollo de movimientos electorales *antiestablishment* de derecha, así como también partidarios y estables (la UDI en Chile, ARENA en El Salvador), la representación de intereses por medio de corporaciones, tanques de pensamientos, redes tecnocráticas y el uso intensivo de las redes sociales y medios de comunicación abonaron a la pérdida de legitimidad de los progresismos. Además, los sectores dominantes, afectados en su poder instrumental –su capacidad política para incidir en decisiones estatales y políticas a su favor– (Fairfield, 2015), activaron conflictos contra medidas políticas tendientes a afectar sus ingresos y fortunas. Las movilizaciones de las oligarquías agroexportadoras en Argentina (2008), los conflictos por autonomía regional protagonizados por las élites locales de la región de la “media luna” en Bolivia (2008-2010) y las protestas de sectores policiales y militares (2010), y de clases medias y empresarios contra el proyecto de Ley de Herencias en Ecuador (2015) son ejemplos de aquello. Esta conflictividad proélites evidenció la disposición de los sectores dominantes, desplazados de los espacios estatales, a ocupar el espacio de la sociedad civil, tejer redes sociales, avanzar en la creación de *think tanks* como plataformas políticas y emplear repertorios de acción eficaces, previamente utilizados por movimientos sociales críticos y

progresistas, para afianzar su poder, deslegitimar a los gobiernos progresistas, crear corrientes de opinión y disputar la política.

Asimismo, políticas públicas orientadas a transformar sentidos culturales inscritos en la forma social –matriz patriarcal, configuración heteronormativa– abrieron un nuevo campo de conflictividad que desafía el principio democrático anclado en la justicia y la dignidad social. La movilización reaccionaria se manifestó en las contiendas políticas, planteadas como “batallas culturales”, por parte de actores conservadores en contra de derechos sexuales y reproductivos (como la legalización del aborto), la educación sexual integral e inclusiva y el enfoque de género en las políticas públicas. Movimientos como “Con mis hijos no te metas”, propagados en varios países de la región y arraigados en una narrativa religiosa, repudiaron estas políticas, calificándolas de “ideología de género”. El “ecosistema reaccionario” (Cabezas y Vega Solía, 2023) no solo fue el resultado del cambio social en lo que respecta a cuestiones de género y disputa de los principios heteronormativos motorizados por el movimiento feminista,¹ sino que en parte se hizo eco de un sustrato neoliberal-conservador aún presente en las sociedades latinoamericanas.

Así, paradójicamente, el “consenso democrático” traducido en régimen político (“*democracy, the only game in town*”) habilitó la expresión de movimientos y espacios políticos que hacían peligrar la democracia como proyecto de convivencia social, ampliación de derechos e igualdad. Las resistencias creativas (por el aborto, contra el extractivismo, por la igualdad de género, por la incorporación de sujetos desconocidos históricamente) fueron superpuestas por “creatividades reaccionarias” que cuestionan algún principio o fundamento del orden social en una clave antiigualitaria y anti-derechos, lo cual tensiona y debilita el componente sustantivo de la democracia como horizonte común de reconocimiento.

¹ Ver en este volumen el capítulo de Gallardo Lastra et al.

La reacción conservadora y el segundo momento progresista

El agotamiento del ciclo progresista hacia 2015 no solo fue económico, también afectó el nivel de la subjetividad colectiva. En efecto, las políticas de redistribución y reconocimiento agotaron su capacidad de concitar apoyos mayoritarios y, si bien construyeron identidades políticas, perdieron influencia en la subjetividad colectiva en procesos que en muchos casos fueron de inclusión sin representación. El amesetamiento en la situación económica provocó insatisfacciones que se sumaron a las demandas en el espacio público, como las demandas por seguridad y contra la corrupción, amplificadas por el sistema dominante de medios y la influencia cada vez mayor de los entornos virtuales.

El trabajo político y simbólico realizado por las derechas, tanto a nivel social como político, fue clave como respuesta a una “época de cambio” y se tradujo exitosamente en un “cambio de época”. La conexión en el orden de la subjetividad de la mejora en las condiciones de vida de los sectores beneficiados con las políticas inclusivas y los proyectos progresistas fue débil. La “despolitización del bienestar” fue otro de los elementos clave para entender la pérdida de apoyo político.

El ascenso de fuerzas políticas de derecha, ya sea a través de “golpes parlamentarios” (como los casos de Horacio Cartes en Paraguay y Michel Temer en Brasil) o mediante elecciones, como la victoria de Cambiemos en Argentina en 2015, transformó profundamente el panorama político de América Latina. Si bien la muerte de Hugo Chávez en 2013 y la elección de Cartes fueron señales tempranas de este cambio, el triunfo de Mauricio Macri en octubre de 2015, seguido por la controvertida destitución de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula en Brasil, consolidaron el “giro a la derecha” en la región. Asimismo, la derrota de Evo Morales en el referéndum de 2016, que pretendía habilitar su reelección, también dejó entrever una modificación en el escenario político.

Otros eventos relevantes incluyeron las victorias de Pedro Pablo Kuczynski en Perú (2016), Lenín Moreno en Ecuador (2017), Sebastián Piñera en Chile (2018) e Iván Duque en Colombia (2018), culminando con la elección de Jair Bolsonaro en Brasil hacia finales de 2018 y la de Lacalle Pou en Uruguay en 2019. El ciclo se afianzó con el derrocamiento de Evo Morales en Bolivia y la instauración de Jeanine Áñez como presidenta interina, y persiste hasta nuestros días con la elección de Javier Milei, ultralibertario de derecha, como presidente de Argentina.

Este cambio en la orientación política marcó una clara ruptura respecto al ciclo progresista precedente. Los proyectos de desarrollo impulsados durante las primeras décadas del siglo XXI fueron reemplazados por modelos que priorizaron la iniciativa de los actores económicos en el mercado y reintrodujeron políticas neoliberales. Este giro fue interpretado de diversas maneras: como el “fin de un ciclo histórico” (Svampa, 2017), un “repliegue progresista temporal” (García Linera, 2023) o simplemente un freno al movimiento hacia la izquierda en la política latinoamericana (Torrice, 2017). Además, se enmarcó dentro de un contexto global de auge de las *alt-right*, manifestado en la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, el Brexit en Reino Unido y el resurgimiento de movimientos xenófobos y ultranacionalistas en Europa del Este. Según varios analistas, el desgaste de los gobiernos progresistas, tanto en lo económico como en lo identitario, contribuyó a este giro, agudizado por el estancamiento del crecimiento económico y las tensiones en la distribución de la riqueza.

Hablar de giro conservador o a la derecha es partir de una dimensión altimétrica que enfatiza más en el recambio de élites políticas y el devenir de proyectos políticos en clave reaccionaria y menos en los cambios en el sustrato social que imprime una dinámica y naturaleza distinta a lo social en movimiento. En ese sentido, queremos también reponer las formas que lo social asume en este nuevo ciclo político. Si bien asistimos a cambios de envergadura en el modo de pensarse la producción de la vida (sistemas

de cuidados, despatriarcalización de ciertos ámbitos, violencia de género dentro de las agendas públicas y mediáticas, reducción de brechas económicas y de género, etc.) –varios de los cuales fueron y son bandera del movimiento feminista–, sensibilidades conservadoras y reaccionarias con relación al género, la diversidad, lo religioso, lo plurinacional e intercultural persistieron en el sustrato social e incluso se exacerbaron como reacción a los avances de sujetos subalternizados. Estas sensibilidades –una especie de potencia patricia– fueron explotadas y capitalizadas por las propuestas de derecha en un contexto de torsión democrática.

El proyecto hegemónico de las derechas asumió una tarea de restauración conservadora neoliberal. Por un lado, procuraron desmantelar la estatalidad tendiente a la redistribución y la protección social para fortalecer la dimensión de control social. Por otro lado, articularon la oposición a las agendas proderechos y progresistas, que fueron catalogadas como “políticamente correctas” (Stefanoni, 2021). Así, vemos que desde 2015 los otrora movimientos sociales contestatarios, para quienes el neoliberalismo consistía en el adversario a combatir, dan paso y conviven con otras formas sociales que se colocan en las antípodas. Movimientos que la propia forma democrática habilita y que, paradójicamente, su dinámica cuestiona e impugna los principios democráticos en tanto discuten qué derechos se producen y reconocen en una comunidad. Incluso el cuestionamiento al reconocimiento de derechos lo hacen impugnando el desconocimiento que habría implicado hacia otros derechos (por ejemplo, el “derecho a la vida” en los movimientos antiaborto). Ahora bien, este gesto político de invalidar ciertos derechos “progresistas” con ciertos derechos “conservadores” no deja de ser un síntoma de la disputa por los fundamentos normativos de la sociedad y, en definitiva, un lugar de disputa de proyectos hegemónicos. Cabe destacar también que varían las gramáticas de la acción colectiva de los diferentes sectores de la sociedad movilizada, donde conviven repertorios de acción colectiva

clásicos como las movilizaciones callejeras con estrategias en redes sociales y ciberactivismo.

Estas derechas, que combinan liberalismo económico con una agenda social conservadora, lograron conectar con los malestares de amplios sectores sociales y el agotamiento de las expectativas en los gobiernos progresistas (Kessler y Vommaro, 2021). No solo comparten la misma visión económica neoliberal ortodoxa, sino un rechazo a lo que consideran todo viso de populismo (al que llaman comunismo, castrochavismo, socialismo del siglo XXI) y un violento antiizquierdismo, apuestas punitivistas y agendas retrógradas en materia de derechos sexuales (Ramírez Gallegos, 2023). Progresivamente se fueron radicalizando, asumiendo en muchos casos una deriva autoritaria. Estos gobiernos (como el de Macri en Argentina, el de Bolsonaro en Brasil, el de Piñera en Chile) comparten el uso represivo de las fuerzas de seguridad para acallar toda protesta social y el uso político del *lawfare* para eliminar a los adversarios políticos. En ese marco, la erosión de la democracia como régimen político (se pervierte el Estado de derecho y las libertades fundamentales) y reconocimiento de derechos está a la orden del día. A esto se le suma que la llegada de la pandemia por covid-19 exacerba la lógica de desposesión capitalista, mercantilizando aún más los aspectos de la vida cotidiana. Lejos de robustecer la institucionalidad estatal, varios países aprovecharon este contexto de aislamiento social y, en muchos casos, de estados de excepción para radicalizar sus agendas promercado y, especialmente, vaciar el Estado y ponerlo al servicio de los grupos económicos concentrados. Como se expuso en Stoessel y Coronel (2023), el desmantelamiento de la inversión pública, las concesiones a transnacionales de recursos estratégicos, la flexibilización laboral, el encarecimiento de la vida y el autoritarismo, incluyendo dictaduras bancarias, se entronaron en el ciclo de mayor dolor social y riesgo durante la emergencia sanitaria. Según datos de la CEPAL (2021), para 2020 la pobreza extrema se elevó a niveles registrados veintisiete años atrás (35 % promedio) y el coeficiente de Gini

aumentó en 2020 más de dos puntos porcentuales. En 2020 se detuvo la tendencia a la caída de la desigualdad que venía observándose en la región desde 2002. La pandemia se convirtió en el gran desigualador, más que en un igualador, y el deterioro distributivo afectó más a los segmentos pobres: “los quintiles más acomodados perdieron menos que los más pobres: más específicamente, la caída del ingreso medio total del quintil más pobre fue, en promedio, 3,2 veces la reducción del ingreso total en el quintil más rico” (CEPAL, 2021, p. 56). La fortuna de los 73 mil millonarios de América Latina aumentó desde el comienzo de la pandemia y cada dos semanas ha aparecido un nuevo milmillonario. La riqueza de esta élite de supermillonarios ha crecido un 17 %, esto es, USD 48.200 millones que equivalen al 38 % de los paquetes de estímulo que la totalidad de gobiernos latinoamericanos ha activado.

El intento de las élites de afianzar una cultura política desigual y modelos de desarrollo privatistas, extractivistas, antiecológicos e injustos socialmente fue resistido por distintos sujetos en distintos rincones de la región. Mujeres, estudiantes, pueblos y nacionalidades, campesinos, movimientos ecologistas y trabajadores precarizados protagonizaron un ciclo de movilización iniciado en 2018 que derivó en los “estallidos sociales” de 2019 en países como Chile, Ecuador, Haití y Colombia. Durante estos eventos contenciosos, en que se combinaron repertorios disruptivos y se logró mantener de forma prolongada la acción colectiva (en Chile el estallido duró casi dos años hasta el proceso constituyente de 2022), se disputaron públicamente visiones alternativas de democracia al reclamar por dignidad (“hasta que la dignidad se haga costumbre”, fue la consigna chilena), bienestar, fin de austeridad y del entreguismo de la soberanía nacional (Paredes, Tatagiba y Ramírez, 2022). Estas contiendas evidenciaron distintas dinámicas de interacción sociopolítica: acción colectiva directa para expresar el malestar social, conformación y fortalecimiento de plataformas comunicacionales alternativas a los medios privados, articulación de organizaciones de DD. HH. por la defensa de los detenidos y activación

de clásicos espacios de negociación institucional, que en el caso de Chile tuvo su máxima expresión en el llamado al proceso constituyente para redactar una nueva Constitución. Estas protestas y paros nacionales contra los intentos gubernamentales de una clase política comprometida con el gran capital para reducir subsidios sociales, aumentar impuestos a las mayorías y cumplir obligaciones financieras con organismos internacionales fueron sintomáticos de que el giro político hacia la derecha y el sustrato social conservador del que hablamos eran aún resistidos. Lo (pluri)nacional popular fue reivindicado desde abajo. En Ecuador, el último día del paro nacional (13 octubre 2019), Vargas, el dirigente indígena que negoció el fin del paro en el debate televisado con el presidente Moreno, expresó: “Hoy no estamos hablando como movimiento indígena. La CONAIE busca construir un verdadero Estado plurinacional. Estamos entre todas las organizaciones sociales como gesto de paz social”.

No obstante, la violenta represión de estas protestas, junto con la criminalización y judicialización que comenzaron luego de estos estallidos sobre las poblaciones y grupos que habían protagonizado estas contiendas, son pruebas de la disputa aún en ciernes entre proyecto democráticos participativos, anclados en la justicia social, y proyectos privatistas y expoliadores. Los estallidos evidenciaron la historicidad y acumulación de las desigualdades y la riqueza concentrada en manos de elites económico-financieras que, lejos de encarnar proyectos de país igualitarios y justos, apostaron nuevamente por un retorno neoliberal, pero ahora en un contexto de afianzamiento de un capitalismo desregulado y financiero. Por su parte, las élites en el gobierno reposicionaron un lenguaje que recordaba las épocas de la Guerra Fría y la construcción de enemigos internos para apuntalar el neoliberalismo autoritario, y al mismo tiempo lo combinaron con el uso de nuevos espacios abiertos, como la virtualidad.

Una de las características de la reacción conservadora fue su eficacia en el uso de novedosas estrategias e intervención en los

nuevos espacios de disputa por el sentido y la subjetividad, lo que transformó las formas del espacio público y del ejercicio de la acción en una sociedad civil virtualizada. El espacio de las redes sociales no solo implica cambios en las estrategias comunicacionales, sino que pone en evidencia un cambio morfológico en los campos de la política reconfigurando los contornos de lo público y sus dinámicas políticas. No solo el capitalismo cognitivo impacta en el modo de producción de las mercancías, sino también en las lógicas políticas. Nuevos actores (desde grandes empresas de telecomunicaciones hasta *influencers*), discursos de odio anonimizados, *fake news* y acontecimientos virales son parte del entorno en el que las derechas encontraron mejores recursos y capacidades de uso. Esto es clave, para lo que tratamos aquí, por dos motivos. En lo democrático, porque implica un desafío para la intervención y regulación del Estado en un horizonte de ampliación de derechos. El caso de Brasil es ilustrativo. Con los requerimientos judiciales a la red social X (ex Twitter) por su participación en el golpe a Dilma Rousseff y la negativa del magnate Elon Musk, culminó con el cierre de esa red en todo el territorio brasileño. Y en lo que respecta a los movimientos sociales, porque el cambio en el espacio público, o el descentramiento de este espacio, produjo una nueva territorialidad desterritorializada para buena parte de la política. Esto no quiere decir que los movimientos hayan desaparecido, ni que sus repertorios no tengan implicancias, o que se hayan alejado de una “política de la esperanza”, pero sí que encuentran dificultades para configurarse con la eficacia de antaño. Luego de la pandemia, incluso en sociedades que históricamente revistieron una alta capacidad de movilización, los movimientos y las organizaciones sociales tuvieron dificultades para articular demandas en el espacio público y tramitarlas institucionalmente.

Esta tendencia del ciclo de derecha se revirtió parcialmente con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México, Alberto Fernández en Argentina, Pedro Castillo en Perú, Luis Arce Catacora en Bolivia y, más recientemente, Xiomara Castro en Honduras,

Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile y Lula en Brasil. Más allá de las particularidades nacionales, pueden vislumbrarse dos tipos de casos. Por un lado, aquellos procesos políticos de raigambre “nacional-populares” que llegaron al poder por primera vez en este siglo: México y Colombia. Ambos países articularon décadas de luchas y frustraciones a partir de dos liderazgos fuertes y estrategias electorales exitosas.

La Cuarta Transformación encabezada por López Obrador reactualiza el imaginario nacional-popular, obturado por las derivas autoritarias y la opción neoliberal en ese país, y realiza una selectividad estratégica de las demandas a tramitar. Esto explica la variedad de relaciones –de cooperación y de tensión– que Morena, tanto en campaña como en gestión, estableció con organizaciones y movimientos sociales (Luna Hernández, González Contreras y Modonesi, 2018). En el nuevo contexto comunicacional, el presidente mexicano encontró tácticas eficaces de comunicación y de gestión, además de emprender la construcción de un partido movimientista (Morena), cuya fragmentación le permite ser sensible a las distintas situaciones coyunturales, pero le impide convertirse en un factor de movilización masivo (Ortega, 2023). Las políticas de restitución de capacidades estatales para la regulación de la economía (como la nacionalización del litio) y cambios significativos en la política social consolidaron al gobierno, que fue revalidado en las elecciones de 2024 con Claudia Sheinbaum Pardo como candidata a la presidencia.

El Pacto Histórico encabezado por Gustavo Petro triunfó en las elecciones de 2022, en un contexto marcado por la salida de la pandemia, la desmovilización de la principal guerrilla de Colombia y mediante un balotaje que lo favoreció por la debilidad de su contrincante. Asumió, así, en Colombia el primer gobierno de izquierda producto de una amplia coalición poco institucionalizada pero efervescente en cuanto a demandas insatisfechas, desigualdad estructural y un contexto político marcado por la violencia. El Pacto Histórico propuso un conjunto de reformas en el

campo estructurante de las relaciones sociales: el sistema de salud, el de pensiones, el fiscal/tributario y el educativo, que fue objeto de disputas y negociaciones con la oposición. La importancia de los entornos virtuales ha sido registrada en la práctica política del presidente, especialmente por la centralidad de sus intervenciones en Twitter (Baquero y Amores, 2024; Rubio, 2024). Mientras que la relación con los movimientos sociales ha sido compleja en parte por la naturaleza de la organización popular en Colombia, potente, heterogénea y fragmentada, lo que tensiona el proceso de representación política.

Por otro lado, están los casos en los que, luego del breve pero intenso interregno de la derecha en el gobierno, se registra la vuelta al poder de fuerzas políticas que fueron protagonistas del primer momento del siglo XXI (Bolivia, Argentina, Chile, Honduras y Brasil). En este regreso al progresismo, no se puede soslayar el rol que jugó la resistencia social. Como muestran Natalucci y Fernández (2022) para el caso argentino, la resistencia en el espacio público de parte de organizaciones sindicales, sociales y movimientos logró traducirse en un espacio político-partidario que fue el Frente de Todos, que ganó las elecciones en diciembre de 2019 y permitió detener la deriva neoliberal del gobierno de Macri. Algo similar sucedió en Brasil, donde una coalición amplia y heterogénea, acompañada por sectores de los movimientos sociales, llevaron a Lula a la presidencia.

En cualquier caso, el análisis de los nuevos gobiernos progresistas no puede obviar el avance y radicalización de las derechas políticas y sus expresiones sociales por medio de intensos movimientos de extrema derecha y conservadores, que han delineado tanto las condiciones de gobernabilidad de los nuevos gobiernos progresistas como los horizontes predictivos igualitarios de una vida en común (García Linera, 2023). Este fenómeno, además de representar un desafío político para los gobiernos populistas, puede ser considerado como un síntoma que invita a reflexionar sobre la eficacia de estas experiencias de representación política en

los planos económico, social, cultural y geopolítico, así como en la construcción de subjetividades emancipadoras que se configuren e interpelen en clave nacional-popular. Asimismo, la democracia, luego de al menos cuatro décadas, deja de ser el régimen político preferido y se abre la opción del autoritarismo como forma y mecanismo de la política. Latinobarómetro informa para el 2023 que este año se coloca como el pico más bajo de todo el siglo XXI de apoyo de las sociedades latinoamericanas a la democracia. Asimismo, solo el 48 % de las sociedades latinoamericanas en promedio acepta la idea de que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, cuando en 2010 era el 63 %. Al mismo tiempo, el 2023 es el año en que se registra el pico más alto, de todo el siglo XXI, en que la sociedad apoyaría un gobierno autoritario (17 %). Esta desafección con la democracia encuentra sus mayores detractores entre los jóvenes varones.

Procesos de democratización –demandas por mayor participación, vida digna, derechos, igualdad–, impulsados tanto desde la forma social en movimiento como desde la política (los proyectos que recién incursionan en la segunda ola progresista), se disputan con procesos de des-democratización, que evidencian una intensificación de la disputa democrática tanto a nivel de régimen político como de los regímenes sociales de acumulación y la producción de la vida.

Esto ha generado debates sobre el estatus de los sujetos, sus identidades, el Estado, las políticas económicas, sociales y culturales, la integración regional, la democracia y las formas de gobierno. Todo esto ocurre en un contexto de inestabilidad sistémica, caracterizado por una crisis económica y ecológica global, los efectos duraderos de la pandemia del covid-19, la guerra entre Rusia y Ucrania, un realineamiento geopolítico que hace crujir el actual orden hegemónico mundial con el reposicionamiento de los BRICS como actores globales en un escenario multipolar, en el que el genocidio a Palestina aparece como una de las tantas expresiones de la avanzada de proyectos autoritarios.

Cierre y apertura. Movimientos sociales, Estado y democracia en tiempos de crisis

Estamos atravesando una crisis estructural, una crisis –si se nos permite– en un nivel ontológico de lo social. Esto implica la puesta en tensión y el desgarramiento de relaciones sociales que configuraron el ser social en el plano económico (la crisis del capitalismo), en lo político (la crisis de la democracia), en lo cultural (los patrones de producción identitaria) y, por supuesto, la articulación de estos que conforman el ordenamiento social. Es comprensible, entonces, que entren en crisis figuras de mediación como el Estado, la democracia y los movimientos sociales. Ahora bien, las dislocaciones, los agujeros y las tensiones requieren de la intervención política para ofrecer suturas que configuren la producción y la reproducción de la vida. En América Latina, la salida del modelo neoliberal a fines del siglo pasado constituyó un proceso que tropezó con limitaciones sistémicas y con desaciertos políticos, generando tensiones desestabilizadoras.

En primer lugar, el crecimiento con una matriz estadocéntrica generó tensiones con agentes económicos nacionales y transnacionales. Es decir, aunque sea efectivo, ese crecimiento genera tensiones por exceso con un sector del capital. Pero cuando se desacelera, provoca tensiones por defecto vía inestabilidad económica e insatisfacción de las demandas. En segundo lugar, la inclusión tiene un problema por exceso cuando se basa en acceso al consumo por la tendencial infinitud del deseo, acceso a bienes y servicios en sociedades globalizadas, y cuando el consumo, entonces, aparece como un mecanismo de movilidad social. Por defecto cuando se van perdiendo inclusiones (cobertura de salud, previsión social, trabajo formal, calidad educativa, servicios públicos). En tercer lugar, la distribución se tensiona por exceso cuando afecta intereses de sectores dominantes y genera reacciones “antiigualitarias”, pero también por defecto cuando la distribución comienza

a mostrar limitaciones. En cuarto lugar, en la dimensión del reconocimiento, cuando no se alcanzan a reconocer o satisfacer las demandas (por ejemplo, feminismo en Ecuador, indígenas, etc.), se producen tensiones por defecto, pero por “exceso” cuando estos reconocimientos dislocan identidades tradicionales cuestionando el *statu quo*, lo que genera reacciones (machistas, patronales, terratenientes, blancos vs. indígenas-negros). Finalmente, podemos mencionar la relación entre esos gobiernos y los movimientos sociales. Los sujetos políticos configurados como protagonistas del giro a la izquierda se nutrieron de las demandas de los movimientos sociales y los incorporaron, ya sea como parte del dispositivo gubernamental o para construir la agenda pública. No obstante, esto generó tensiones por las características de los gobiernos que atendían a intereses multisectoriales. Aunque friccionaban con élites empresariales, también lograban acuerdos con ellas, y sus proyectos hegemónicos fueron más pluralistas de lo que habitualmente se reconoce.

Los vínculos entre estos gobiernos con el campo social movilizado fueron sinuosos y heterogéneos, puesto que estos proyectos políticos en la mayoría de países, a raíz de cómo se movieron estas cuatro dimensiones (crecimiento, inclusión, redistribución y reconocimiento) y también de las lógicas políticas activadas, produjeron dos frentes de tensiones (conflicto, negociación, deliberación) con los sujetos sociales.

Por derecha, se activó un ciclo de movilización social protagonizado por sectores dominantes en lo económico, impulsado por el tipo de crecimiento económico basado en el mercado interno, la soberanía nacional y capitales locales, además de un “exceso” en la distribución en algunos casos. A esto se sumaron colectivos ciudadanos con demandas conservadoras, motivados por el reconocimiento de un “exceso”, y sectores medios que abogan por mayor movilidad social ascendente, que durante el ciclo de izquierda fue operado por medio del consumo y de la protección social a través

del Estado de aquellos sectores ya integrados, especialmente al mercado laboral.

Por izquierda, los gobiernos progresistas se enfrentaron a múltiples demandas acumuladas. Por un lado, surgieron reclamos en torno a las consecuencias de los modelos extractivos de desarrollo primario sobre los territorios y la soberanía nacional. Por otro lado, se plantearon demandas políticas por mayor participación, democratización y autonomía, así como exigencias por el reconocimiento de sujetos históricamente racializados y subalternizados, como fueron los casos de movimientos campesinos, indígenas y colectivos ligados a las diversidades sexogenéricas. Por último, surgieron reclamos por un cambio estructural del régimen social de acumulación y la forma social de la vida, como los que han encarnado el movimiento feminista en toda la región. En la mayoría de países, “desde arriba” se avanzó en agendas de género, pero en todos los casos con severas limitaciones para construir horizontes de igualdad capaces de tramitar demandas particulares ya no en una clave diferencial, sino orientados a la construcción de sujetos (no meros actores) con vocación emancipatoria a partir de la conexión de las diversas luchas. No obstante, sus avances fueron lo suficientemente radicales como para producir malestares que se han traducido en expresiones de odio por parte de colectivos, en lo fundamental, de varones blancos cisgénero que han visto afectados sus privilegios y que constituyen al día de hoy el basamento social/electoral de las nuevas fuerzas de ultraderecha, frente a los cuales los intentos de construir “cordones sanitarios” están fallando a nivel global.

Estos dos frentes de movilización –por derecha y por izquierda– fueron relativamente permanentes durante el ciclo de la izquierda, lo cual se explica, en parte, por la lógica decisionista de los liderazgos políticos, poco proclives a negociar y alejarse de sus agendas programáticas, mientras que se constituyen ellos mismos en superficies de inscripción de las demandas frente a la desarticulación de las mediaciones clásicas, como el partido y el sindicato.

Asimismo, el agotamiento, crisis o déficit del imaginario igualitarista que ha encarnado lo “nacional-popular” para lograr aglutinar y responder a distintas dimensiones –clase, raza/etnia, género–, en un contexto en que el conflicto estructural de las sociedades dejó de ser el del trabajo(asalariado) vs. el capital, ha tenido su contraparte en el surgimiento de fuerzas políticas y sociales que denuestan las prácticas, lenguajes y políticas asociadas a dicho imaginario. En este agotamiento también cabe preguntarnos si “lo nacional” (como la comunidad imaginada de B. Anderson, es decir, la capacidad de inventar lo común a partir de solidaridades diversas, y como comunidad organizada, en la que lo común predomina sobre el individuo) y “lo popular” entran en crisis. A medida que se agota el ciclo de izquierda, lo popular deja de ser articulado cada vez más por los proyectos igualitaristas y comienza a ser interpelado y tramitado por propuestas “antiderechos” y conservadoras. El componente nacional también entra a formar parte de las estrategias de las derechas políticas en el marco de la lógica global de un capitalismo que, al mismo tiempo que se desterritorializa –vía valorización financiera–, se territorializa para despojar a las poblaciones (el avance de grupos narcocriminales es sintomático de aquello). La “bukelización” de la política apela al imaginario nacional y a la defensa de la soberanía territorial con una deriva autoritaria que socava las mínimas libertades.

El campo político en el que se disputa la hegemonía ha sufrido significativas transformaciones, producto tanto del propio proceso político como de las transformaciones estructurales-estructurantes de lo social. Esto afecta la capacidad de acción de los movimientos sociales y explica su crisis. Las transformaciones de los espacios de la política impactan en el desempeño de los movimientos. Por un lado, la expansión de los entornos virtuales como dispositivos de producción de subjetividades, donde circulan lógicas comunicacionales específicas (*fake news*, viralizaciones, *influencers*), requirió recursos materiales y capacidades discursivas que las organizaciones populares no siempre pudieron aprovechar. En

cambio, el activismo de derecha fue más efectivo y contó con el soporte de empresas tecnológicas para operar en las redes sociales. Por otro lado, la dimensión territorial se ve modificada por lógicas de aislamiento físico que regulan la circulación de los cuerpos y ponen desafíos a los lazos sociales y experiencias de lo común. En efecto, se desterritorializan prácticas y se inscriben en la virtualidad, transformando la manera de habitar estos espacios públicos. Esto debilitó espacios tradicionalmente ligados a las prácticas políticas populares y a la construcción de una democracia como poder del pueblo.

El giro a la derecha explotó estas tensiones y en algunos casos tensionó con la democracia, ya sea por vulnerar el principio de la soberanía popular (como en Brasil y Bolivia), como por socavar marcos de reconocimiento común de la comunidad política (los grupos negacionistas de las dictaduras en Chile y Argentina abonan experiencias políticas como la de Kast y Milei respectivamente). Sin embargo, los ecos de la transición democrática constituyen un contexto en América Latina y estos proyectos deben ser refrendados mediante procedimiento de democracia electoral. En efecto, el procedimiento electoral aceptable por las partes en contienda sigue siendo un aspecto relevante para dotar de legitimidad intrínseca y extrínseca a los procesos políticos de la región. El triunfo del Frente de Todos en Argentina luego del gobierno de Mauricio Macri y el de Lula en Brasil después de Bolsonaro pusieron en evidencia tanto las promesas incumplidas de la derecha para las mayorías como una moderación de las propuestas progresistas. El clima de polaridad afectiva y la definitiva instalación de los entornos virtuales como escenarios de la política en contextos económicos tormentosos fueron condición de posibilidad y limitaciones de estas propuestas.

En un contexto societal dislocado, que evidencia las marcas de múltiples crisis (la crisis financiera de 2008, la emergencia sanitaria por el covid-19, la crisis socioambiental, en el modo de producción, etc), la región atraviesa tiempos de disputas sobre cómo dar

respuestas. No se trata de una mera crisis de gobernabilidad, sino de un replanteo profundo del ordenamiento social y su dimensión política. En este sentido, encontramos dos orientaciones resolutorias principales (más allá de los matices y de la obturación de expectativas altermundistas) que informan proyectos político-éticos: uno que reivindica el neoliberalismo y el desplazamiento del Estado como coordinador social, otro preocupado por la organización de la vida en común con criterios de justicia social a cargo del Estado. Es evidente que los procesos muestran un mercado fallido, pero también incapacidades del Estado como mediador, o al menos los límites de los mercados realmente existentes (oligopólicos, corporativos) y de los Estados realmente existentes (burocratizados, ineficientes, proclives a ser permeados por los grupos concentrados, desinstitucionalizados). Los distintos proyectos ideológicos en pugna –de eso se trata– buscan recuperar esos mecanismos, en algunos casos configurarlos, por ejemplo, a través de una mejor relación Estado y sociedad civil. Es claro, también que los proyectos tienen una relación distinta con la democracia y con los movimientos sociales, que en definitiva es su diferencia en la concepción de la política. Una política de la esperanza debe apostar por revitalizar estas tres figuras –movimientos sociales, Estado y democracia– en una forma contemporánea, acorde a los tiempos históricos actuales y no como lamento nostálgico.

Bibliografía

Amarante, V. y Colacce, M. (2018). ¿Más o menos desiguales? Una revisión sobre la desigualdad de los ingresos a nivel global, regional y nacional. *Revista CEPAL*, (124), 7-34.

Baquero, W. G. y Amores, J. J. (2024). Política en 280 caracteres: un estudio de la opinión pública en Twitter sobre el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia. *Disertaciones. Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social*, 17(2).

Cabezas Fernández, M. y Vega Solís, C. (2023). *La reacción patriarcal. Neoliberalismo autoritario, politización religiosa y nuevas derechas*. Quito: Abya Yala/Bellaterra Ediciones.

Castillo Fernández, D. (2022). Modelo de desarrollo, precariedad laboral y nuevas desigualdades sociales en América Latina. *Revista CEPAL*, (136).

CEPAL (2021). *Panorama Social de América Latina*. Naciones Unidas, Santiago.

Dagnino, E.; Olvera, A. y Panfichi, A. (2006). *La disputa por la construcción democrática en América Latina*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.

Davis, D. E. y Davey, T. (2023). Shifting Geographies of Activism and the Spatial Logics of Latin American Social Movements. En F. Rossi (ed.), *The Oxford Handbook of Latin America Social Movements*. Oxford: Oxford University Press.

Echeverría, B. (1996). El *ethos* barroco. *Debate Feminista*, 13, 67-87.

Evans, P. (1996). El estado como problema y como solución. *Desarrollo económico*, 35(140), 529-562.

Fairfield, T. (2015). *Private Wealth and Public Revenue in Latin America. Business Power and Tax Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Fraser, N. (2000). Nuevas reflexiones sobre el reconocimiento. *New Left Review*, (4), 55-68.

García Linera, A. (2017). ¿Fin de ciclo progresista o proceso por oleadas revolucionarias? *Pulso de los pueblos*. <http://pulsointernacional.com/fin-de-ciclo-progresista-o-proceso-por-oleadas-revolucionarias-por-alvaro-garcia-linera/>

Garretón, M. A. (2001). Cambios sociales, actores y acción colectiva en América Latina (Serie Políticas Sociales n.º 56). CEPAL. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/cd19a7c3-4aa1-4b80-899a-37a3db51baa6/content>

Gasparini, L. (2019). La desigualdad en su laberinto: hechos y perspectivas sobre desigualdad de ingresos en América Latina. CEDLAS-UNLP. https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/wp-content/uploads/doc_cedlas256.pdf

Kessler, G. (2019). Algunas reflexiones sobre la agenda de investigación de desigualdades en Latinoamérica. *Desacatos*, 59, 86-95.

Kessler, G. y Vommaro, G. (2021). Introducción al dossier “Movilizaciones de la derecha en América Latina”. *Población e Sociedad*, 28(2), 1-7.

Luna Hernández, F.; González Contreras, S. y Modonesi, M. (2018). Las organizaciones sociales frente a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y Morena en 2018. *Revista mexicana de estudios de los movimientos sociales*, 3(1), 28-47.

Nun, J. (1987). *La teoría política y la transición democrática*. En J. Nun y J. C. Portantiero (comps.), *Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina*. Buenos Aires: Puntosur.

O'Donnell, G.; Schmitter, P. C. y Whitehead, L. (comps.) (1988). *Los procesos de transición y consolidación democrática en América Latina. Transiciones desde un gobierno autoritario*. Buenos Aires: Paidós.

Ortega, J. (2023). Hegemonía precaria: la 4T mexicana y lo nacional-popular. *Cuadernos del Ciesal*, 1(22), 1-17.

Paredes, J. P.; Tatagiba, L. y Ramírez Gallegos, F. (2022). Tiempos turbulentos. Giros políticos y horizontes inciertos en América Latina. *Polis*, (61).

Pateman, C. (2014). *Participación y teoría democrática*. Buenos Aires: Prometeo.

Pérez Sáinz, J. P. (2014). *Mercados y bárbaros. La persistencia de las desigualdades de excedente en América Latina*. San José: FLACSO.

Portantiero, J. C. y Nun, J. (1987). *Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina*. Buenos Aires: Puntosur.

Quijano, A. (2000). *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina*. La Plata: Ediciones de la Campana.

Quintana, L.; Salas, C. y Correa-Quezada, R. (2019). Crisis, empleo y desigualdad en América Latina: Una comparación entre México, Brasil y Ecuador. *Journal of Regional Research*, (43), 29-147.

Ramírez Gallegos, F. (2023). ¿Nuevo giro a la izquierda o transformación del conflicto político? *Cuestiones de Sociología*, (28), e156. <https://doi.org/10.24215/23468904e156>

Ramírez Gallegos, F. y Stoessel, S. (2023). Transformations of Workers' Mobilization in Latin America. En F. Rossi (ed.), *The Oxford Handbook of Latin America Social Movements*. Oxford: Oxford University Press.

Ramírez Gallegos, R. (2023). *Quien parte y reparte, ¿se queda con la mejor parte? Las derechas y las izquierdas en la distribución del pastel en América Latina, 2000-2020*. Buenos Aires: IPET.

Retamozo, M. y Morris, M. B. (2015). Sindicalismo y política. La Central de Trabajadores Argentinos tiempos kirchneristas". *Estudios sociológicos*, 63-87. <https://www.aacademica.org/martin.retamozo/98>

Rossi, F. (ed.) (2023). *The Oxford Handbook of Latin America Social Movements*. Oxford: Oxford University Press.

Rubio, A. B. (2024). El gobierno desde X: Análisis del caso Gustavo Petro en Colombia. *Index.comunicación. Revista científica en el ámbito de la Comunicación Aplicada*, 14(1), 255-279.

Stefanoni, P. (2021). *¿La rebeldía se volvió de derecha? Cómo el anti-progresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común (y por qué la izquierda debería tomarlos en serio)*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Stoessel, S. (2014). Giro a la izquierda en la América Latina del siglo XXI: Revisitando los debates académicos. *Polis*, 13(39), 123-149.

Stoessel, S. y Coronel, V. (2023). *La (des)regulación de la riqueza en América Latina. Lecturas interdisciplinarias en tiempos de pospandemia*. Buenos Aires: CLACSO.

Svampa, M. (2017). *Del cambio de época al fin de ciclo*. Buenos Aires: Edhasa.

Torrico, M. (2017). *¿Fin del giro a la izquierda en América Latina? Gobiernos y políticas públicas*. Ciudad de México: FLACSO.

Zavaleta Mercado, R. (2000). *Problemas teóricos de la política y el desarrollo en América Latina*. Buenos Aires: Siglo XXI.